



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, veinte (20) de abril de dos mil veintiuno (2021)**

*Proyecto discutido y aprobado en sala virtual*

Demandante: ALBA LUZ LEDESMA MESA  
Demandados: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES  
COLPENSIONES; y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE  
PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.  
Radicado: 05001 31 05 017 2019 00452 01  
Sentencia: S-074

### **AUTO**

Se accede a la sustitución de poder presentada por el apoderado judicial de COLPENSIONES, Dr. SANTIAGO MUÑOZ MEDINA, a favor del Dr. DARÍO MAURICIO TOBÓN CHAMORRO, quien se identifica con T.P. N° 271.442 del C. S. de la Judicatura; en consecuencia, se le reconoce personería judicial para actuar en los mismos términos que al apoderado principal con efectos desde el momento mismo de la presentación del memorial.

### **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por COLPENSIONES, al igual que el grado jurisdiccional de Consulta concedido a favor de ésta última en los aspectos no recurridos, con

motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín el 16 de junio de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES:**

ALBA LUZ LEDESMA MESA demandó a PROTECCIÓN S.A. y a la ACP COLPENSIONES, pretendiendo se declare la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, por cuanto no se le proporcionó una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos. Pretende además se condene a las entidades demandadas al pago de las costas del proceso.

### **LOS HECHOS:**

Expone como fundamento de sus peticiones, que estuvo afiliada al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hasta el mes de abril de 1999, completando un total de 302.43 semanas de cotización; que en esa fecha se trasladó al Régimen de Ahorro Individual administrado por PROTECCIÓN S.A., aunque sin contar con la información suficiente que avalara dicha decisión; que en ese momento no le brindaron información relacionada con las graves consecuencias del traslado, ni situaciones adicionales como el saldo que debía acreditar en su cuenta de ahorro individual para poder acceder a una pensión anticipada; y que una proyección de su situación pensional muestra como en el RAIS accedería a una pensión bajo la figura de garantía de pensión mínima, mientras que en el Régimen de Prima Media podría alcanzar una suma de \$1'974.029.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:**

Al contestar, COLPENSIONES acepta la afiliación de la demandante a esa entidad, pero aclara que según la historia laboral actualizada, el número de semanas cotizadas es de 297.86. Acepta igualmente lo relacionado con el traslado a PROTECCIÓN S.A. y el cumplimiento de las 1300 semanas de cotización en toda la vida laboral. Frente a los demás hechos dice que no le constan por estar dirigidos a otra entidad. Se opuso a las pretensiones en tanto dice que la demandante se encuentra válidamente afiliada al RAIS. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación demandada, falta de derecho para pedir, imposibilidad jurídica para cumplir con las obligaciones pretendidas, buena fe y prescripción.

PROTECCIÓN S.A. a su turno, acepta únicamente lo relacionado con la afiliación de la demandante a esa entidad, pero aclara que ese hecho ocurrió con la suscripción del formulario en el mes de noviembre de 1994 a la entonces AFP ING PENSIONES Y CESANTÍAS, en el que se dio estricto cumplimiento a todos los parámetros legales para que el mismo se constituyera en un acto jurídico válido y eficaz, precedido además de una asesoría amplia, correcta, clara comprensible y suficiente sobre todos los aspectos del RAIS. Se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda en tanto la demandante manifestó su voluntad de trasladarse de forma libre y espontánea. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de recursos públicos del Sistema General de Pensiones e inexistencia de la obligación de devolver las cuotas de administración y el seguro previsional por falta de causa.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 16 de junio de 2020, el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín DECLARÓ que la demandante ejerció

su derecho a trasladarse de régimen pensional dentro de los límites establecidos en el artículo 13 de la ley 100 de 1993 y por ende le da validez a la solicitud de afiliación a COLPENSIONES realizada el 4 de abril de 2014. ORDENÓ además a PROTECCIÓN S.A. trasladar a COLPENSIONES los recursos de la cuenta de ahorro individual de la demandante, junto con los rendimientos que se hubieren causado. Finalmente CONDENÓ en costas a la AFP PROTECCIÓN S.A. y a COLPENSIONES, fijando como agencias en derecho la suma de \$1`800.000.

### **DEL RECURSO DE APELACIÓN:**

Inconforme con lo decidido, la parte demandante solicita se modifique la sentencia y se tenga en cuenta, además de la validez que consideró el despacho del traslado como oportuno, que el traslado inicial al RAIS fue ineficaz, teniendo en cuenta que en su caso tampoco se cumplió con la obligación del deber de información según el criterio ampliamente desarrollado por los juzgados de Medellín, el Honorable Tribunal Superior de Medellín en su Sala Laboral y la Corte Suprema de Justicia, como es el caso de la sentencia SL 1452 de 2019. Además, frente a las cuotas o gastos de administración, solicita se ordene el traslado en consideración a la línea jurisprudencial que se ha desarrollado.

COLPENSIONES por su parte, considera que el literal e del artículo 13 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la ley 797 de 2003, es claro en señalar que la posibilidad o la limitante de los 10 últimos años, es cuando le faltaren 10 años o menos, pero en este caso en el momento en que la actora hizo la solicitud de traslado, estaba dentro de la limitante en la medida en que ya se habían cumplido esos 10 años, por lo que no se podía declarar la validez de la afiliación, tal y como lo hizo COLPENSIONES cuando en su momento decidió negar esa solicitud de afiliación al fondo. Agrega que debe analizarse la circunstancia conforme a jurisprudencia de la Corte

Suprema de Justicia, esto es, lo que se ha vertido en sentencias SL 1688, SL 1421 y SL 3464 del año 2019, ya que los supuestos sí estaban dados para analizar el asunto respecto a la ineficacia del traslado, y en este caso se tendría que analizar si efectivamente hubo confesión o no, si la información era suficiente, clara, veraz y oportuna; se debería analizar si se otorgaron las garantías necesarias para que se realizase el traslado en condiciones de no coacción, igualmente haber analizado en el presente proceso si era posible o no la devolución de los gastos de administración.

Señala finalmente, que en caso de que el tribunal considere que no se entregó la información suficiente, se debe analizar si efectivamente en el presente proceso se debería declarar la ineficacia de la afiliación y como consecuencia la devolución de todos los gastos de administración, esto es el 16% de la cotización con sus rendimientos financieros correspondientes, lo que implicaría además revocar la condena en costas y ordenar el traslado de las cuotas de administración y demás gastos ocasionados por la afiliación a PROTECCIÓN S.A.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:**

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, COLPENSIONES presentó sus alegatos de conclusión indicando que, tal y como se pudo verificar en audiencia, los fondos privados de pensiones le brindaron a la demandante una plena información a la hora de realizar el traslado de régimen, dando cumplimiento a su deber de información y llevando a que voluntariamente se suscribiera el respectivo formulario. Agrega que las normas laborales establecen unos requisitos para el traslado de régimen, y prohíbe expresamente el mismo cuando a la persona le falten 10 años o menos para cumplir la edad de pensión, conforme al artículo 2º de la Ley 797 de 2003, lo que impide a la demandante retornar al Régimen de Prima Media. De mantenerse la decisión de primera instancia, solicita se tenga en

cuenta que en el Régimen de Ahorro Individual se gravan los aportes de los afiliados con un porcentaje de administración que no existe en el Régimen de Prima Media, por lo que, según se advierte en las sentencias SL del 8 septiembre de 2008, rad. 31989, SL 17595-2017, SL 4989-2018 y SL1421-2019, hay lugar a reintegrar la totalidad de la cotización, es decir: i) los recursos de la cuenta individual del afiliado, ii) las cuotas abonadas al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, iii) los rendimientos, y iv) los porcentajes destinados al pago de Seguros Previsionales y gastos de administración, todo lo cual se debe devolver de manera indexada.

### **CONSIDERACIONES:**

Corresponderá en esta instancia, además de resolver los temas propuestos por los apoderados de la demandante y de COLPENSIONES a través de sus respectivos recursos de apelación, conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de ésta última -en los temas restantes- con el objeto de salvaguardar sus intereses, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia proferida en primera instancia mediante la cual se declaró la validez del traslado efectuado por la demandante a COLPENSIONES el 4 de abril de 2014, así como las ordenes consecuenciales respecto a los dineros que la AFP queda en la obligación de trasladar.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** ALBA LUZ LEDESMA MESA nació el 4 de abril de 1967 (fl. 16); **ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones el 13 de enero de 1988, acumulando en esa entidad un total de 302.43 semanas (f. 141); y **iii)** el 8 de noviembre de 1994 suscribió el respectivo formulario de afiliación a la entonces AFP ING S.A., hoy PROTECCIÓN S.A., entidad a la que además se trasladó formalmente mediante formulario suscrito el 23 de abril de 1999 (f. 24 y 128).

Aunque el fundamento de la demanda está relacionado con la falta de información de la AFP PROTECCIÓN S.A. al momento de tramitar el traslado de la señora ALBA LUZ desde el entonces INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en la sentencia se estableció que dentro de la oportunidad legal se había realizado una solicitud con el fin de que aquella pudiera retornar al Régimen de Prima Media, lo que ocurrió el día 4 de abril de 2014, justamente la fecha en que alcanzó la edad de 47 años, siendo ese el que según la funcionaria a quo era el límite para esos efectos.

Tiene que ver lo anterior con el contenido del artículo 13 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la ley 797 de 2003 que dispone, concretamente en su literal e, lo siguiente:

*"Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren **diez (10) años o menos** para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez"*

A juicio de la Sala, tal y como lo reclama COLPENSIONES en su recurso de apelación, ese traslado que la demandante pretendió realizar no tiene validez alguna y por tanto no podía ser declarado de esa manera en la sentencia de primera instancia, ya que según se aprecia en el documento visible en los fls. 36 vto y 37 (páginas 43 y 44 del expediente digital), tal solicitud fue radicada el 4 de abril de 2014, día que, según la cédula de ciudadanía de la afiliada, corresponde al de su cumpleaños 47, ya que nació el 4 de abril de 1967.

Es decir, se trata de una solicitud radicada precisamente en el marco de tiempo que la norma está prohibiendo, ya que allí se dispone que el traslado entre regímenes no podría realizarse i) cuando le falten 10

años o; ii) cuando le falten menos de 10 años y claramente a la demandante, para ese día, ya le faltaban 10 años para cumplir la edad mínima requerida para acceder a una pensión de vejez.

De todas maneras, ello no implica que deban negarse las pretensiones de la demanda, pues, aunque no fue el sustento para la decisión, en la sentencia se advirtió acerca del incumplimiento al deber de información en que incurrió la AFP PROTECCIÓN S.A., lo que dará lugar a que se declare, como era lo pretendido con la demanda, la ineficacia del traslado de régimen pensional que realizó la señora ALBA LUZ LEDESMA MESA el 8 de noviembre de 1994.

Al respecto, importa reiterar, tal y como ha sido dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, amplio y suficiente, es un deber exigible desde su creación.

Así lo señaló desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando con el transcurso de los años, y en el año 2019 la tesis fue afianzada, como puede verse, entre otras, en las sentencias SL 1421, SL 1452, SL 1688 y SL 1689, todas, se repite del 2019. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

*“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya*



*lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."*

En la SL 1452-2019, Rad. 68852 del 3 de abril de 2019, la Corte Suprema de Justicia robusteció el criterio que apunta a considerar, como ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado, los siguientes: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) que le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) que no es necesario estar a portas de causar el derecho o tener un derecho consolidado para que se produzca la ineficacia del traslado.

En la misma providencia, se analizaron los diferentes estadios de la evolución normativa respecto de esta exigencia, cada uno de ellos con regulaciones propias que apuntan a la misma finalidad en cuanto a la garantía para el afiliado de su derecho a una debida información, bien al momento de elegir el régimen pensional, ora cuando opte por trasladarse de régimen. Exigencias que se tornan cada vez más rigurosas, así:

1. Partiendo de una primera fase, compuesta por aquellas disposiciones que se derivaron de la Ley 100 de 1993, en sus

artículos 13 literal b), 271 y 272, así como el decreto 663 de 1993 o Decreto Orgánico del Sistema Financiero, el cual incluye los fondos de pensiones, momento para el cual, el alcance mínimo del deber de información incluía la ilustración de *“las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales”*

2. Vino luego una segunda etapa a partir de la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010, caracterizado porque obligó al análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y de los pormenores de los regímenes pensionales, Y
3. Un tercer periodo que viene dado desde la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015, tildada como la ley de doble asesoría, el cual lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

En el presente caso, no se evidencia prueba alguna que permita tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas de la afiliada, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, incumplió el Fondo privado su deber de información a la afiliada, al no suministrarle, *“en forma clara y precisa, las características, condiciones, consecuencias y riesgos del cambio de régimen”* (SL 1689-2019)

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación de ninguna manera puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho

documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento. También a este respecto se ha pronunciado la jurisprudencia ordinaria, v. gr. sentencia SL 19447-2017:

*“Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, **no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario [...].”***

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, “La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”.

En consecuencia, la sentencia de primera instancia será modificada en el sentido de declarar la ineficacia del traslado efectuado por la señora ALBA LUZ LEDESMA MESA al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, con la consecuente orden para COLPENSIONES de reactivar dicha afiliación, sin solución de continuidad.

### **Cuotas de administración.**

De otro lado, teniendo en cuenta que la decisión adoptada en primera instancia opera con los mismos efectos como se de una ineficacia de traslado se hubiera tratado, es decir, como se ordenó el traslado del saldo existente en la cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos financieros, salvo lo relacionado con las cuotas de administración, el tema que se revisará según el recurso de apelación planteado por COLPENSIONES, para lo cual basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos que es factible ordenar a las AFPs correspondientes, que procedan con el traslado a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en las sentencias SL 31989 - 2008; SL 4964 de 2018, SL 4989 de 2018, SL 1421 de 2019, SL 1688 de 2019, rad. 68838 de mayo 8 de 2019, o más recientemente la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667. En esta última dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.*

(...)

*Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima» (Resaltado por la Sala).*

Si bien es cierto por regla general los actos jurídicos son celebrados para que sean eficaces y produzcan efectos jurídicos propios, cuando tales actos jurídicos no resultan eficaces, por haber nacido viciados en el sentido amplio del término, desde el comienzo o incluso porque llegan a desaparecer por un evento posterior a la celebración del acto, se traduce en que nunca produjeron efectos o que habiéndolos producido dejan de generarlos por una causal sobreviniente a la celebración del acto jurídico. En el primer evento, esto es, cuando se considera que el acto nunca produjo efectos, como en este caso acontece, las cosas vuelven a su estado anterior, como si aquel jamás hubiera nacido a la vida jurídica.

En consecuencia, la decisión deberá ser MODIFICADA en el sentido de ordenarle a la AFP PORVENIR S.A. que proceda igualmente con el traslado de las cuotas de administración recibidas durante el tiempo que la señora ALBA LUZ LEDESMA MESA estuvo vinculada a esa entidad, incluyendo además las sumas adicionales de las

aseguradoras, comisiones y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima.

Todo lo anterior sin que sea procedente la indexación según se solicita en los alegatos de conclusión presentados en esta instancia por COLPENSIONES, pues se trata de una cuestión que debió plantearse en la contestación de la demanda o cuando menos en el recurso de apelación, de manera que una decisión en tal sentido implicaría decidir más allá de lo pedido, lo que no resulta procedente en sentencias de segunda instancia.

### **Condena en costas**

Ahora, en lo que tiene que ver con la condena en costas impuesta a cargo de COLPENSIONES, tema que también se discute expresamente en el recurso de apelación, basta con señalar que el artículo 365 del Código General del Proceso ratificó el criterio objetivo en cuanto ordena que en los procesos y en las actuaciones posteriores en que haya controversia, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, entre otros casos.

En este caso, la condena a COLPENSIONES según la modificación que se está haciendo, implica simplemente recibir el valor de los aportes realizados a la Administradora del Régimen de Ahorro Individual y reactivar la afiliación de la demandante, lo que opera simplemente como una consecuencia lógica de la orden previamente impartida en el sentido de declarar la ineficacia de esa afiliación al RAIS, de manera que bien puede decirse que, sin esta orden, aquellas condenas no se hubieran producido.

Dicho de otro modo, era inexigible otra conducta para COLPENSIONES antes de que la presente declaratoria de ineficacia del traslado se

hubiere proferido, pues esta entidad no es autoridad judicial como para resolver, antes del proceso, la reclamación de la demandante. En consecuencia, se revocará la condena en costa impuesta en su contra.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y a favor de la demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$908.526.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **R E S U E L V E:**

**REVOCA** la sentencia proferida por el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Medellín, el día 16 de junio de 2020 y en su lugar dispone: **1) DECLARAR** la ineficacia del traslado de la señora ALBA LUZ LEDESMA MESA del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, realizado a 8 de noviembre de 1994 por violación al deber de información; **2) ORDENAR** a PROTECCIÓN S.A., que proceda a trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, el valor de los aportes recibidos por la afiliación de la demandante, así como los rendimientos financieros y sin descontar suma alguna por cuotas de administración, porcentajes de seguros y reaseguros, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima; y **3) ORDENA** a COLPENSIONES recibir las anteriores sumas, incluirlas en la historia laboral como semanas cotizadas y reactivar la afiliación de la demandante a esa entidad, sin solución de continuidad.

Costas en ambas instancias exclusivamente a cargo de PORVENIR S.A. y a favor de la demandante. Como agencias en derecho en segunda instancia, se fija la suma de \$908.526.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS en los términos del artículo 295 del Código General del Proceso.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 066  
del 21 de abril de 2021

**Consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

**Firmado Por:**

**JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**FRANCISCO ARANGO TORRES**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3c001b1c71858b754b074b1c5dd41e1b53d60ffb1c384b5d66b28e329e1d92f8**

Documento generado en 20/04/2021 01:39:39 PM